

NORMA HURTADO SÁNCHEZ

Representante a la Cámara

09 de octubre de 2020

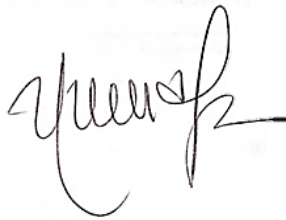
PROPOSICIÓN ADITIVA

Acorde con lo dispuesto en los artículos 112 a 115 de la Ley 5ª de 1992, me permito realizar proposición aditiva de un artículo nuevo al Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara y 185 de 2020 Senado, el cual quedará así:

Artículo nuevo. Las entidades territoriales podrán celebrar líneas de crédito a través de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, organismos bilaterales y multilaterales y entidades estatales, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción en los ingresos ordinarios derivada de una emergencia económica, social y ecológica declarada por el Presidente de la República.

PARÁGRAFO. Para la contratación de líneas de crédito de carácter interno, las entidades territoriales y sus descentralizadas continuarán rigiéndose por lo señalado en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso, y se podrán utilizar los recursos obtenidos en el financiamiento de estudios, diseños, mantenimiento y dotación de infraestructura.

Atentamente,



NORMA HURTADO SÁNCHEZ

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

JUSTIFICACIÓN

El decreto 437 de 2020 se fundamenta en:

Que en los eventos en que sobrevengan hechos de los que trata el considerando anterior, se pueden ocasionar interrupciones en el mercado financiero y el sector real que ocasionen que las entidades estatales sujetas al régimen de crédito público requieran acceder a fuentes de financiamiento en condiciones especiales para aliviar la presión de liquidez y necesidades operacionales.

Que el artículo 9 de la Ley 781 de 2002 establece que el Gobierno nacional orientará la política de endeudamiento público hacia la preservación de la estabilidad fiscal. Para dicho fin, podrá definir y clasificar las nuevas formas de endeudamiento y los nuevos tipos de operaciones de crédito público.

NORMA HURTADO SÁNCHEZ

Representante a la Cámara

Que dentro de las formas de endeudamiento y los tipos de operaciones de crédito público que pueden requerir las entidades estatales para aliviar presiones de liquidez devenidas de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica se encuentran, entre otros, los créditos de tesorería y las líneas de crédito.

Que de conformidad con el numeral 23 del artículo 3 del Decreto 4712 de 2008 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe fijar las políticas de financiamiento externo e interno de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas, registrar y controlar su ejecución y servicio, y administrar la deuda pública de la Nación.

Que dado que las operaciones de crédito público y asimiladas también comprenden el financiamiento de gastos diferentes de inversión, para la realización de un seguimiento responsable del endeudamiento de las entidades estatales es necesario que se cuente con una revisión previa de su situación financiera, incluyendo niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago.

Que con base en las consideraciones anteriores es pertinente reglamentar algunos mecanismos para facilitar el acceso de las entidades estatales a fuentes de financiación para atender gastos diferentes a la inversión, en tanto puedan contribuir a aliviar presiones de liquidez devenidas de una emergencia económica, social y ecológica que sea declarada por el Presidente de la República.

Por otra parte, el decreto 678 de 2020

Que dada la demanda de recursos para atender las crecientes necesidades generadas con esta crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan la reducción y optimización de los procedimientos para ejecutar los recursos, así como contar con mayores rentas para destinarlas incluso a financiar gastos de funcionamiento propio de las entidades.

Que el sistema presupuestal colombiano ha dispuesto una serie de requisitos para ejecutar los recursos por parte de las entidades territoriales que implica que los gobernadores y alcaldes estén facultados por sus respectivas corporaciones administrativas.

Que se han identificado limitaciones presupuestales en el orden territorial que impiden la asignación urgente de los recursos que demandan las actuales circunstancias ' señalas en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por lo que **se hace necesario una modificación normativa de orden temporal que permita a las entidades territoriales efectuar las operaciones presupuestales que resulten necesarias.**

Que se debe propender por **instrumentos legales que doten a las entidades territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento;**

Que la crisis generada por la presencia del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional ha impactado de manera negativa a todos los sectores de la economía nacional, ralentizando su desempeño y disminuyendo de manera significativa sus ingresos y la capacidad de pago de sus obligaciones laborales, comerciales y tributarias, **por lo que se hace necesario establecer medidas que morigeren dicho impacto y les permitan a los diferentes sectores honrar sus obligaciones.**

Que se consideró la necesidad de dotar de instrumentos legales a las entidades territoriales para contar con mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, **permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento.**

NORMA HURTADO SÁNCHEZ

Representante a la Cámara

Que de conformidad con las estimaciones efectuadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las posibles contracciones de los ingresos corrientes de los departamentos, municipios y distritos, se **estima que el mayor impacto en las finanzas de las entidades territoriales se verá reflejado en los años 2020 y 2021, motivo por el cual las diferentes medidas que se adopten para aliviar este impacto deberán aplicarse durante tales vigencias.**

Ahora bien, estos desarrollos jurisprudenciales no se han dado frente a las facultades presupuestales excepcionales de las entidades territoriales durante los estados de excepción declarados por el Gobierno Nacional, debido a que las medidas presupuestales adoptadas en el marco de estos estados han obedecido a afectaciones en regiones determinadas que **han requerido los mayores esfuerzos desde el presupuesto nacional y en menor medida el manejo de los recursos ya incorporados en los presupuestos de los departamentos, municipios y distritos. Tales son, por ejemplo, las situaciones de la avalancha del río Páez en 1994, el terremoto en el departamento del Quindío en 1999 y la avalancha en el Departamento del Putumayo en el año 2017¹.**

De manera complementaria, debe advertirse que el Decreto Legislativo 678 de 2020 tiene como supuesto que la crisis originada por el coronavirus COVID-19 afecta todo el territorio nacional, razón que fundamenta la declaratoria del estado de emergencia, pero que también esencialmente es una crisis localizada, pues afecta particularmente a cada uno de los departamentos, municipios y distritos, individualmente considerados.

Se está garantizando la celeridad en los manejos presupuestales y la disponibilidad de los recursos necesarios a nivel territorial para enfrentar la emergencia de salud pública y socioeconómica derivada de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, y que ante la imprevisibilidad de los hechos no habían sido previstos en los presupuestos territoriales o se habían contemplado en menor medida.

¹ <https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=16720>